

0 REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

Medellín, trece (13) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez, quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, procede dentro del proceso ordinario con radicado número 05001310501820170037701, promovido por la señora **MARÍA GLADYS ROJO PÉREZ**, contra **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**, con la finalidad de resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de COLPENSIONES frente a la sentencia emitida el 13 de febrero de 2020 por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, y revisar en consulta la misma providencia en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

De conformidad con el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...” se toma la decisión correspondiente mediante

providencia escrita número **058**, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

Mediante acción judicial, solicita la demandante, se reconozca y pague a su favor, pensión de sobreviviente en un 50% de la mesada pensional, debido al vínculo marital con el señor JOAQUÍN GUILLERMO LONDOÑO, con retroactividad desde el 06 de marzo de 2013, incluyendo la mesada 13. Además de ello, se condene el pago de los intereses moratorios consagrados en la Ley 100 de 1993; y la indexación.

Como fundamento fáctico de sus pretensiones, indicó que contrajo matrimonio con el señor JOAQUÍN GUILLERMO LONDOÑO el día 22 de febrero de 1972; en dicha unión, procrearon una hija; que el señor LONDOÑO falleció el 06 de marzo del año 2013; que mantuvieron convivencia hasta el 25 de agosto de 1987, fecha en que se separan de hecho, pero su matrimonio se mantuvo vigente. Cuenta que, el 26 de enero de 2017 solicitó el reconocimiento de la pensión, la cual fue rechazada por COLPENSIONES mediante Resolución GNR 62722 del 01 de marzo del año 2017, con fundamento en que, dicha prestación se le reconoció a la señora BLANCA CECILIA URIBE CAIPA que se presentó en calidad de compañera permanente del causante, motivo por el cual, declaran que su derecho ya está prescrito. Finalmente, narra que se agotó la vía administrativa conforme el artículo 6 del código procesal laboral.

En auto admisorio de la demanda, se ordenó vincular como litis consorte necesario por pasiva, a la señora BLANCA CECILIA URIBE CAIPA.

Notificadas las accionadas, dieron respuesta de la siguiente manera:

COLPENSIONES indicó que son ciertas la mayoría de afirmaciones narradas en la demanda, pero no le consta lo relativo a la procreación de una hija dentro del

matrimonio, y la convivencia hasta 1987. Se opuso a las pretensiones, y formuló las excepciones que denominó *“inexistencia de la obligación de reconocer y pagar a la demandante la prestación solicitada”*, *“improcedencia de intereses moratorios”*, *“Improcedencia de la indexación”*, *“Imposibilidad de condena en costas”*, *“Prescripción”*, *“Buena fe DE Colpensiones”*, *“mala fe de la demandante”* y *“compensación”*.

Por su parte, la señora BLANCA CECILIA URIBE CAIPA, a nombre propio, arrió escrito indicando que se acoge a lo que se declare en el proceso.

En sentencia del trece (13) de febrero del año dos mil veinte (2020), el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, declaró que a la señora MARÍA GLADYS ROJO PÉREZ le asiste derecho a la pensión de sobreviviente en favor con ocasión del fallecimiento del causante JOQUIN GUILLERMO LONDOÑO, en calidad de cónyuge, a partir del 26 de enero del año 2014, correspondiéndole el 44.02% del 100% sobre el salario mínimo legal mensual vigente, en consecuencia condenó a COLPENSIONES a pagar la suma de \$13.548.404 como retroactivo pensional entre el 26 de enero del año 2017 al 31 de enero del año 2020, más los intereses moratorios y las costas del proceso. Adicional a ello, condenó a la señora BLANCA CECILIA URIBE CAIPA, a reconocer y pagar a MARÍA GLADYS, la suma de \$10.997.692 como retroactivo pensional entre el 26 de enero de 2014 a 125 de enero de 2017. Finalmente, condenó en costas a COLPENSIONES y a BLANCA CECILIA URIBE CAIPA.

APELACIÓN

COLPENSIONES presenta recuso de apelación contra la decisión proferida en primera instancia, argumentando que no se demostró la convivencia de MARIA GLADYS con el fallecido, y que él vivía con BLANCA CECILIA, con la cual, convivió alrededor de 28 años. Además, mencionan que MARIA GLADYS convivía con otro hombre antes de la muerte del causante, y actualmente es su esposo. También señala que MARIA GLADYS no contribuyó a una construcción conjunta de la pensión. También menciona que COLPENSIONES actuó de buena

fe y no incurrió en mora, ya que a la señora BLANCA CECILIA se le ha venido pagando la pensión por más de 10 años, y en el momento en que la señora BLANCA CECILIA solicitó la pensión, también se le dio traslado a la señora MARIA GLADYS. Concluye afirmando que no es procedente la condena respecto de los intereses y las costas procesales, por lo tanto, solicita revocar la sentencia y absolver a COLPENSIONES de cualquier cargo, sin condena en costas procesales ni en primera ni en segunda instancia.

ALEGATOS

Pese haberse surtido el respectivo traslado, las partes no arrimaron alegaciones finales.

PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico de esta instancia, consiste en determinar si la señora MARÍA GLADYS ROJO PÉREZ, en calidad de cónyuge con vínculo matrimonial vigente, es beneficiaria de la prestación por muerte del señor JOAQUÍN GUILLERMO LONDOÑO; además de ello, se estudiará si procede el pago de intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, o la indexación. Como problema jurídico asociado, se establecerá si se afectará la mesada pensional que actualmente recibe la señora BLANCA CECILIA URIBE CAIPA, en calidad de compañera permanente.

CONSIDERACIONES

El sistema de Seguridad social integral, con el fin de amparar la contingencia denominada “muerte” y salvaguardar así el grupo familiar de la persona que fallece y percibía en el ahora finado parte coadyuvante de los ingresos familiares, reglamentó el reconocimiento de la que denominó “pensión de sobreviviente”.

Para la verificación de tal derecho, es imperativo determinar la fecha del fallecimiento del afiliado o pensionado, pues la norma vigente para la época del hecho funesto es la que, debe aplicarse al momento de dar estudio a la procedencia o no de la prestación.

Reposa en la foliatura, aportado por la parte actora, registro civil de defunción que da cuenta de la muerte del señor JOAQUÍN GUILLERMO LONDOÑO el 06 de marzo de 2013, momento, para el cual, se encontraba en vigencia la Ley 797 de 2003 modificatoria de la Ley 100 de 1993 y sobre el tema indicó:

“Artículo 46. Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:

1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca y,

2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acrediten las siguientes condiciones:

PARÁGRAFO 1o. *Cuando un afiliado haya cotizado el número de semanas mínimo requerido en el régimen de prima en tiempo anterior a su fallecimiento, sin que haya tramitado o recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la devolución de saldos de que trata el artículo 66 de esta ley, los beneficiarios a que se refiere el numeral 2 de este artículo tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes, en los términos de esta ley.*

El monto de la pensión para aquellos beneficiarios que, a partir de la vigencia de la Ley, cumplan con los requisitos establecidos en este parágrafo será del 80% del monto que le hubiera correspondido en una pensión de vejez.”

Respecto a la calidad de beneficiarios de la prestación, para la época de la muerte se encontraba vigente:

“ARTÍCULO 13. Los artículos 47 y 74 quedarán así:

“Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;

b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).

Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.

*En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal, pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante **siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante**. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente;*

c) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y cumplan con el mínimo de condiciones académicas que establezca el Gobierno; y, los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, esto es, que no tienen ingresos adicionales, mientras subsistan las

condiciones de invalidez. Para determinar cuándo hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993;

d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de forma total y absoluta de este;

e) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con derecho, serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían económicamente de éste.

PARÁGRAFO. *Para efectos de este artículo se requerirá que el vínculo entre el padre, el hijo o el hermano inválido sea el establecido en el Código Civil.”*

Es importante precisar, que este articulado ha sido objeto de numerosas explicaciones sobre el alcance de lo que el legislador ambicionó proteger, bien por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia como por la Corte Constitucional.

En sentencia SL 1399 del 25 de abril de 2018, la Honorable Sala Laboral unificó sus sub reglas respecto del alcance hermenéutico del artículo, sobre los requisitos que debe cumplir el cónyuge o compañero permanente, para ser considerado beneficiario de la pensión de sobrevivientes. La importancia de la sentencia radica, en que estimó que el elemento que da vida al derecho, es la convivencia, que inexorablemente debe ser de 5 años, como mínimo, sin hacer distinción sobre la calidad del causante, bien pensionado como afiliado, y delimitó la noción de convivencia así:

“Comunidad de vida, forjada en el crisol del amor responsable, la ayuda mutua, el afecto entrañable, el apoyo económico, la asistencia solidaria y el acompañamiento espiritual, que refleje el propósito de realizar un proyecto de vida de pareja responsable y estable, a la par de una convivencia real efectiva y afectiva, durante los años anteriores al fallecimiento del afiliado o del pensionado”.

En sentencia SL 1730 de 2020, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia indicó que el requisito mínimo de convivencia de cinco (5) años, debía

entenderse exigible solamente en el caso de la muerte de pensionado, pues la norma, no traía ese requisito para el caso del afiliado. Sin embargo, la Corte Constitucional como máximo órgano de interpretación a la luz de la constitución, en sentencia SU 149 de 2021 indicó que en la sentencia SL 1730 de 2020, la Corte Suprema de Justicia desconoció el principio de igualdad y de sostenibilidad financiera del sistema pensional, así como el precedente judicial aplicable que no era otro que lo establecido en Sentencia SU-428 de 2016, para lo cual debió cumplir con cargas argumentativas que brillaron por su ausencia, al no exponer las razones por las cuales su postura divergente garantizaba de mejor modo los principios y valores constitucionales involucrados, pues desde la sentencia C-336 de 2014 la Corte Constitucional fue clara en indicar la igualdad de requisitos respecto a pensionado y afiliado en cuanto a convivencia se refiere, siempre afirmando la necesidad de ser *“parte del grupo familiar de quien fallece”* para acceder a la prestación, bajo la luz del artículo 46 de la Ley 100 de 1993.

Así mismo, en sentencia SU 108 de 2020, se explicó los elementos probatorios que deben estar presentes cuando se estudia la convivencia, pues puede darse el caso, que los cónyuges o compañeros permanentes no puedan cohabitar el mismo lugar, sin que ello rompa la convivencia de la pareja, pues en cada caso habrá de estudiarse las condiciones que dieron origen al rompimiento material. Esta precisión, ha sido avalada por la Sala laboral de la Corte Suprema de Justicia.

En cumplimiento a lo expuesto, es claro que el requisito predominante para adquirir el derecho a la pensión de sobreviviente a la luz de la sentencia SU 149 de 2021, sigue siendo la convivencia, que en caso del afiliado y del pensionado deberá ser de cinco años, pues siendo un criterio de raigambre constitucional, su aplicación es obligatoria de cara a lo dispuesto en la Ley 270 de 1996.

Todo este razonamiento se da de cara al literal a) del artículo 47 de la Ley 797 de 2003.

Sobre el Liberal b), la Corte Suprema de Justicia posicionó desde el año 2012 una nueva interpretación en donde amplió la exegesis dada a dicho literal, en el sentido de aplicar la postura de otorgarle una cuota parte o la pensión a *“quien acompañó al pensionado u afiliado, y quien, por demás hasta el momento de su muerte le brindó asistencia económica o mantuvo el vínculo matrimonial, pese a estar separados de hecho, siempre y cuando aquel haya perdurado los 5 años a los que alude la normativa, sin que ello implique que deban satisfacerse previos al fallecimiento, sino en cualquier época”*, esto debía aplicarse, a los casos en que no existiese compañera o compañero permanente al momento del fallecimiento del afiliado o pensionado, toda vez que *“si el derecho incorporado en ese literal, otorgaba esa prerrogativa a la (el) cónyuge cuando mediaba una (un) compañera (o) permanente, no podía existir argumento en contra, ni proporcionalidad alguna, que se le restara cuando aquella no se hallaba, pues entonces la finalidad de la norma no se cumplía, es decir, no se proveía la protección al matrimonio que el legislador incorporó, haciendo la salvedad, de que la convivencia en el matrimonio, independientemente del periodo en que aconteció, no podía ser inferior a 5 años, según lo dispuesto en la preceptiva”*, quedando así armonizado el contenido de la citada norma con criterios de equidad y justicia, lo que implica un estudio en particular para cada asunto que se someta a escrutinio.

Este criterio se ha venido aplicando de manera pacífica por ambos órganos de cierre, ya que no hay posturas encontradas, pues la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha reiterado su posición en providencias recientes como SL 4962 de 2019, SL 359 de 2020, SL 966 de 2021 y SL 3251 de 2021, SL 633 de 2023, SL 638 de 2023 y la Corte Constitucional ha dado aplicación en sede de tutela. Igualmente, desde providencias como T-015 de 2017 y T-128 de 2016 se indicó la procedencia de la prestación al margen de la continuidad de nexos de ayuda mutua y apoyo.

Recientemente en la sentencia T 231 de 2022 se explicó:

“43. Por otro lado, respecto del requisito de convivencia, tanto la Corte Suprema de Justicia como la Corte Constitucional han establecido que este puede acreditarse en cualquier tiempo.”

independientemente del vínculo que haya mantenido el causante con el beneficiario que solicita el reconocimiento y pago de la sustitución pensional. (subrayas y negrillas fuera del texto original)”

En sentencia SL 638 de 2023 se enunció:

“En punto a la intelección del inciso 3 del literal b) de la Ley 797 de 2003, la Corte tiene definido, entre otras, en la sentencia CSL SL1180-2022, que la cónyuge separada de hecho, pero con vínculo matrimonial vigente, aun hallándose disuelta la sociedad conyugal, es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes si acredita una convivencia mínima de 5 años con el causante, en cualquier tiempo. Allí se recordó:

Precisamente esa es la intelección que la Sala le ha dado a dicha preceptiva, entre otras, en las sentencias CSJ SL3251-2021, CSJ SL1869-2020, CSJ SL2232-2019, CSJ SL5141-2019 y CSJ SL1399-2018, última en la que señaló:

En efecto, a partir de la sentencia SL, 24 en. 2012, rad. 41637, esta Sala planteó que el cónyuge con unión matrimonial vigente, independientemente de si se encuentra separado de hecho o no de su consorte, puede reclamar legítimamente la pensión de sobrevivientes por su fallecimiento, siempre que hubiese convivido con el (la) causante durante un interregno no inferior a 5 años, en cualquier tiempo. En específico, en esa oportunidad señaló: (...)

El anterior criterio se reivindicó en las sentencias SL7299-2015, SL6519-2017, SL16419-2017, SL6519-2017, entre otras.

Entonces la convivencia de 5 años con el cónyuge con lazo matrimonial vigente, puede darse en cualquier tiempo, así no se verifique una comunidad de vida al momento de la muerte del (la) afiliado (a) o pensionado (a), dado que: (i) el legislador de 2003 tuvo en mente la situación de un grupo social, integrado a más de las veces por mujeres cuyos trabajos históricamente han sido relegados al cuidado del hogar y que, por consiguiente, podían quedar en estado de vulnerabilidad o inminente miseria ante el abandono de su consorte y su posterior deceso; (ii) esta dimensión sociológica debe servir de parámetro interpretativo, a

modo de un reconocimiento que la seguridad social hace a la pareja que durante largo periodo contribuyó a la consolidación de la pensión, mediante un trabajo que hasta hace poco no gozaba de valor económico o relevancia social; y (iii) es lógico pensar que si con arreglo al último inciso del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, en los eventos de convivencia no simultánea, el cónyuge separado de hecho tiene derecho a la pensión de sobrevivientes en forma compartida, también debe tener derecho a esa prestación ante la inexistencia de compañero (a) permanente.

Por otra parte, la Corte ha clarificado que el referente que le permite al cónyuge separado de hecho o de cuerpos acceder a la pensión de sobrevivientes es la vigencia o subsistencia del vínculo matrimonial. Por lo tanto, otras figuras del derecho de familia, tales como la separación de bienes o la disolución y liquidación de la sociedad conyugal no son relevantes en clave a la adquisición del derecho.

En ese contexto, contrario a lo que alega la recurrente, el ad quem no incurrió en los dislates de interpretación del inciso 3.º del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, al concluir que a Alba María Cárdenas le asistía el derecho a la sustitución pensional pues, además de acreditar 24 años de convivencia con Jorge Perdomo Reyes, su vínculo matrimonial se encontraba vigente a la fecha de deceso del pensionado.”

Dilucidado ello, encuentra esta Sala que, respecto a las señoras MARÍA GLADYS y BLANCA CECILIA, la tesis del presente proceso debe centrarse **en el literal b) de la norma**, pues, desde el líbello gestor predominan los siguientes supuestos:

1. La existencia de una unión conyugal persistente al momento de la muerte.
2. La separación de los cónyuges.
3. La existencia de una compañera permanente.

Es así como, se insiste, se enmarca el dilema en el último inciso del literal b), que trae consigo los siguientes requisitos:

Ante la existencia de cónyuge con unión conyugal vigente y separada de hecho, y compañera permanente que haya convivido con el causante los últimos 5 años, y la inexistencia de convivencia simultánea, podrá la compañera solicitar una cuota parte sobre el tiempo de convivencia, y la otra, será restante para la cónyuge.

En sentencia C-336 de 2014, respecto a la exequibilidad de ello, se pronunció la Corte Constitucional así:

“La separación de hecho suspende los efectos de la convivencia y apoyo mutuo, más no los de la sociedad patrimonial conformada entre los cónyuges. Por lo cual, no nace a la vida jurídica la sociedad patrimonial de hecho entre compañeros permanentes, cuando uno de éstos mantiene en vigor la sociedad patrimonial del matrimonio.

1.4. El Legislador dentro del marco de su competencia, en desarrollo del derecho a la seguridad social en pensiones, puede regular lo referente a los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. En ese orden de ideas, en el caso de la convivencia no simultánea entre el cónyuge con separación de hecho y con sociedad conyugal vigente y el último compañero permanente, ponderó los criterios de la sociedad patrimonial existente entre los consortes y la convivencia efectiva consolida con antelación al inicio de la unión marital de hecho, mediante la asignación de una cuota parte de la pensión.”

Aclarado lo anterior, y descendiendo al caso bajo estudio, sobre el derecho pretendido se tienen probados los siguientes hechos:

- El señor JOAQUÍN GUILLERMO LONDOÑO falleció el 6 de marzo de 2013.
- El 22 de febrero de 1972, el citado señor LONDOÑO contrajo matrimonio con MARÍA GLADYS ROJO PÉREZ.
- De dicha unión, procrearon a MARÍA ROSMERY LONDOÑO ROJO.

- Existió otra relación del causante con la señora BLANCA CECILIA URIBE CAIPA, en calidad de compañera permanente.
- El señor JOAQUÍN GUILLERMO LONDOÑO se encontraba afiliado a COLPENSIONES.
- La citada AFP, mediante Resolución GNR 225751 del 18 de junio de 2014, reconoció prestación económica de sobrevivientes a la señora BLANCA CECILIA URIBE CAIPA, en un porcentaje del 100%.
- Mediante Resolución GNR 62722 del 1 de marzo de 2017, se negó la prestación económica de sobrevivientes a la señora MARÍA GLADYS ROJO PÉREZ.

Así pues, ésta Sala de Decisión se pronunciará inicialmente, con relación a la controversia surgida en la convivencia de la cónyuge separada de hecho, siendo pertinente la valoración de la prueba recaudada así:

Como se indicó anteriormente, del registro civil de matrimonio aportado, se constata que la señora MARÍA GLADYS, contrajo matrimonio con JOAQUÍN GUILLERMO LONDOÑO, unión que se mantuvo incólume, pues de acuerdo al certificado en mención, no se observa nota marginal de disolución de efectos civiles del matrimonio católico o liquidación de sociedad conyugal.

También se arrió declaración extra juicio rendida por los señores EUSTORGIO ZAPATA ARANCETA y GILBERTO DE JESÚS VERA MOLINA (pág. 13 archivo 002), quienes señalaron que conocieron al señor JOAQUÍN GUILLERMO durante 30 y 40 años respectivamente; que éste contrajo matrimonio con la señora MARÍA GLADYS desde el 22 de febrero de 1972, conviviendo hasta el 25 de agosto de 1987, unión donde procrearon a MARÍA ROSMERY LONDOÑO ROJO.

En el mismo sentido, la accionante arrima certificación extra juicio, donde expone que convivió con el causante hasta el 25 de agosto de 1987.

Valorado el interrogatorio de parte de la señora MARÍA GLADYS a las luces del artículo 191 del CGP, como punto de confesión, solo se puede extraer que el causante, antes de su muerte, convivió aproximadamente 28 años con la señora BLANCA.

Por otro lado, y en atención a despacho comisorio decretado por el juzgado de origen, el Juzgado Laboral del Circuito Puerto Berrio Antioquia, practicó la prueba testimonial ordenada, de donde se resalta lo siguiente:

El señor GILBERTO DE JESÚS VERA MOLINA. Expone que conoció a JOAQUIN GUILLERMO LONDOÑO hace aproximadamente 47 años, porque tenía una finca aledaña a donde él trabajaba; que también conoce a MARÍA GLADYS hace por ahí 50 años, porque la familia de ella administraba una finca, y él los visitaba. También narra que el señor LONDOÑO y la señora ROJO PÉREZ convivieron 15 años, y tuvieron una hija llamada MARÍA. Menciona que cuando falleció el señor JOAQUÍN EMILIO, ya se habían separado; luego aclara que la pareja se casó en 1972 y convivieron hasta el 2013, y le consta que la señora GLADYS le comentaba. Igualmente dijo que no supo que el señor JOAQUÍN tuviera otra pareja mientras vivió con MARÍA GLADYS; que estuvo en la ceremonia de matrimonio, y luego de eso, la pareja se fue a vivir en el barrio Buenos Aires de puerto Berrio Antioquia.

Por su parte, el señor EUSTORGIO ZAPATA ARANCETA, depuso que conoció a JOAQUIN GUILLERMO desde el año 1970, porque laboraron en varias fincas, también conoce a MARÍA GLADYS ROJO PÉREZ hace aproximadamente 46 años, porque era amigo de los papás de ella; que la pareja convivió más o menos 14 o 15 años, y tuvieron una hija llamada MARÍA. Más adelante expone que el causante y la señora ROJO PÉREZ vivieron hasta el año 1913; que él estuvo en los llanos y volvió en 1915, y en ese momento se enteró que había fallecido el señor LONDOÑO, (juez comisionado deja constancia que el testigo nació en 1940); y posteriormente refiere que JOAQUÍN vivió con la señora MARÍA GLADYS hasta su fallecimiento, pues no tuvo otra pareja.

Referenciado dicho material probatorio, pertinente resulta rememorar un aparte de lo indicado por el máximo órgano de la especialidad laboral, en sentencia SL1744-2023:

*“Téngase presente, de tiempo atrás la Corte ha sostenido que **la acreditación del requisito de convivencia no se obtiene a través del cumplimiento de una mera formalidad, como una declaración extraprocesal rendida en una notaría o plasmada en un documento**, sino que sólo se puede dar por establecida en la realidad misma, es decir, debe ser el reflejo de una auténtica comunidad de vida estable, permanente y firme, de mutua comprensión, apoyo espiritual y físico y camino hacia un destino común, esto es, en los términos del artículo 42 Constitucional, que consulte el verdadero deseo libre de la pareja, de conformar una familia, con lo cual se obtendría la garantía de protección del Estado y de la sociedad allí ofrecida (CSJ SL5524-2016, reiterada en la CSJ SL3570-2021).”* (Negrita y subraya intencional)

Ello para significar que las declaraciones extra juicio mencionadas, se configuran solo en uno de tantos elementos que deberá analizarse en contexto con el restante acervo, documentos que por demás, a juicio de este Juez Plural, no generan la suficiente contundencia para establecer certeza acerca de los hechos pretendidos, pues los dichos allí plasmados, no se aprecian espontáneos ni genuinos, pues se advierten datos como fechas precisas y cédulas, que las reglas de la experiencia, han enseñado que son de difícil recordación.

Por otro lado, esta Colegiatura considera pertinente evocar que, como elemento de convicción, las declaraciones deben ser revisados de cara a lo establecido en la sentencia SU 129 del año 2021, la cual, respecto a las reglas para la apreciación de la testimonial, explicó:

“Finalmente, respecto de la forma en que debe valorarse la prueba testimonial, los Códigos de Procedimiento Civil y Procesal del Trabajo establecen dos reglas en particular. (i) Siendo necesario procurar un mínimo de objetividad en el testimonio, la ley impone al juez el deber de interrogar a la persona sobre “la razón de la ciencia de su dicho con explicación de las

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que haya ocurrido cada hecho y de la forma como llegó a su conocimiento [...]”101. La respuesta que se dé a esa pregunta también habrá de estudiarse. Por último, (ii) el Código Procesal del Trabajo resalta que, recabados todos los medios de prueba (incluidos los testimonios), el juez debe analizarlos en conjunto y definir si con ellos es posible llegar al convencimiento de los hechos ocurridos. Todo esto “inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes”

De acuerdo a las explicaciones dadas por el máximo órgano constitucional, no basta con escuchar los dichos, sino, indagar las razones de ello, es decir, de dónde se extrae su conocimiento, para así, delimitar la certeza de lo que se expone, pues más allá de querer beneficiar a la parte que la convoca al proceso, debe reproducir aquellos hechos que presencié con la naturalidad propia de quien invoca aquello que se quedó en su memoria episódica.

Sumado a ello, se recuerda que la Sala de Casación laboral de la Corte Suprema de Justicia, se ha pronunciado sobre la aplicación que se debe darse de los artículos 60 y 61 del CPT y de la SS, y en sentencia SL672-2023, reiterando lo enseñado en la SL1474-2021, indicó:

”No sobra agregar, que como en innumerables veces lo ha dicho la Sala, los jueces de instancia, al encontrarse en presencia de varios elementos probatorios que conduzcan a conclusiones disímiles, tienen la facultad, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 del CPTSS, de apreciar libremente los diferentes medios de convicción, en ejercicio de las facultades propias de las reglas de la sana crítica, pudiendo escoger dentro de las probanzas allegadas al informativo, aquellas que mejor los persuadan, sin que esa circunstancia, por sí sola, tenga la virtualidad para constituir un evidente yerro fáctico capaz de derribar la decisión, tal y como se dijo en la sentencia SL18578-2016, reiterada en la CSJ SL4514-2017...”

Ello, importante para precisar que, si bien los testigos coincidieron en señalar que la pareja LONDOÑO-ROJO convivió por un lapso aproximado de 15 años, se precisan algunas inconsistencias relevantes en sus declaraciones, que se pasan a explicar:

- i) El señor GILBERTO DE JESÚS VERA MOLINA indica que la pareja se casó en 1972, conviviendo 15 años, y al momento del fallecimiento de JOAQUÍN GUILLERMO, éste ya no vivía con la demandante. Luego afirma de manera categórica, que la demandante convivió con el causante hasta el año **2013**.
- ii) Dicha situación causa extrañeza a esta Sala, pues siguiendo la primera versión, si la pareja convivió 15 años desde 1972, el año de la separación sería aproximada en 1987 y no 2013, máxime que como lo confesó la demandante en el interrogatorio de parte, para éste última data, el causante ya convivía con la señora BLANCA.
- iii) Situación similar ocurrió con el señor EUSTORGIO ZAPATA ARANCETA, pues éste, indicó que la accionante y el causante, **vivieron hasta el año 1913**, afirmación que genera más sorpresa, cual el testigo informa que vivió en los llanos y volvió en 1915. Sobre el particular, se itera, el juez comisionado dejó constancia que la fecha de nacimiento del testigo era 1940, y él se denotaba “*un poco confundido*”.
- iv) Estas afirmaciones particulares, no fueron siquiera mencionadas por la *A quo* en el análisis de las versiones rendidas.
- v) Se aprecia que los testigos de manera acartonada, expusieron que la accionante convivió con el causante por espacio de 15 años, como ya se indicó, pero en su declaración, no señalaron de manera espontánea, situaciones específicas de la pareja, que conllevaran a este Juzgador Colegiado al convencimiento sobre la intención de un proyecto de vida juntos, ni sobre ayuda mutua, afecto entrañable, apoyo económico, asistencia solidaria, acompañamiento espiritual. Tampoco se pudo establecer, tal como lo indicó la Sala de Casación Laboral, que la demandante durante un largo período, contribuyera a la consolidación de la pensión que hoy se deprecia.

Esta Sala de Decisión no desecha el documento que acredita la existencia del matrimonio de la demandante con el señor LONDOÑO, tampoco ignora que

eventualmente la pareja convivió algún tiempo, ni desconoce que los testigos posiblemente conocieron tanto a la accionante como al causante, ya fuera en pareja o de manera individual, empero, dicho acervo probatorio, no genera en esta Colegiatura, una convicción de veracidad respecto al tiempo de convivencia, que como se ha explicado, es de cinco años en cualquier tiempo, pues el discurso de cada uno de los testigos, además de contradecirse con lo expuesto en la misma declaración, va en contraposición a lo que anteriormente habían manifestado en la declaración extra juicio.

Corolario a lo anterior, al hacer un examen conjunto de la prueba a la luz de las reglas de la sana crítica, artículo 61 del C. P. T. y de la S.S., se advierte que, disidente a lo expuesto en la sentencia de primer grado, no se acreditaron fehacientemente los elementos establecidos por la jurisprudencia constitucional y especializada para demostrar la convivencia durante cinco años, en cualquier época, entre la señora **MARÍA GLADYS ROJO PÉREZ** y **JOAQUÍN GUILLERMO LONDOÑO**.

Es de vital importancia recordar que en lo que respecta a la acreditación del requisito de convivencia para acceder a la prestación derivada por muerte, la valoración de los medios probatorios debe realizarse de manera armónica, pues es claro que cada uno de los sujetos procesales incorpora al plenario distintos medios de convicción, algunos que se contradicen entre sí, pero está precisamente en las manos del juzgador extraer aquello que, llena su convencimiento, como la memoria episódica de los declarantes, las razones de sus dichos, la espontaneidad y claridad en sus exposiciones todo de cara a los documentales de prueba.

Para ello, entonces, la parte solicitante debe exponer aquello que brinde un mínimo de convencimiento judicial que forme una decisión argumentada, claro está, en toda la prueba arrojada al plenario. En atención a eso, el derecho reclamado solo será concedido en la medida en que se demuestre con fuerza lo que asevera en el libelo genitor, pues no solo debe indicarse la calidad de beneficiaria y la convivencia efectiva, sino, crear la certeza de ello, de no ser así,

al dejar una duda razonable al juzgador, la consecuencia lógica será la negativa de lo petitionado, como lo explicó la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 4060 de 2019:

“Esto, traído al caso en examen, implica que, para obtener el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, el demandante deberá demostrar el cumplimiento del requisito de convivencia exigido por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, como regla de carga probatoria, y el juez concederá la pretensión cuando encuentre acreditada la satisfacción de dicho requisito sin que haya lugar a dudas razonables, como regla de juicio al amparo de lo dispuesto por el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

Corolario de lo anterior, si el demandante no asume la carga que le fija el estándar, o el juez tiene dudas razonables, la consecuencia procesal será la negación de la pretensión, en tanto el requisito exigido para su procedencia no se demostró”

Por último, al existir una hija dentro del matrimonio, no sobra recordar que, la simple procreación de hijos no sule para nada el cumplimiento del requisito de la prueba de la convivencia, pues en sentencia CSJ SL 3813-2020 se precisó lo siguiente:

[...]la procreación de hijos no sule el requisito de la convivencia al momento de la muerte, pues lo que ha sostenido la jurisprudencia reiterada de esta Corporación, en torno al verdadero sentido del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, es que tal circunstancia no exime al cónyuge o compañera (o) permanente de la obligación de demostrar que hizo vida marital con el causante hasta el momento del fallecimiento de este (sentencia CSJ SL, 10 mar. 2006, rad. 26710).

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, no queda otra salida que REVOCAR la sentencia de primer grado, para en su lugar, ABSOLVER a COLPENSIONES y a la señora BLANCA CECILIA URIBE CAIPA, de las pretensiones incoadas en su contra por MARÍA GLADYS ROJO PÉREZ, y como consecuencia lógica de ello, la mesada pensional que hasta ahora recibe la

señora URIBE CAIPA, permanecerá incólume en los términos dispuestos por la AFP accionada.

Costas en primera instancia a cargo de la señora MARÍA GLADYS ROJO PÉREZ y a favor de cada uno de las demandadas, que deberán ser liquidadas por secretaría del juzgado de origen. En esta no se causaron Al salir avante el recurso de apelación.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: Revocar la sentencia proferida el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín.

SEGUNDO: Absolver a COLPENSIONES y a la señora BLANCA CECILIA URIBE CAIPA, de las pretensiones incoadas en su contra por MARÍA GLADYS ROJO PÉREZ, y como consecuencia lógica de ello, la mesada pensional que hasta ahora recibe la señora URIBE CAIPA, permanecerá incólume.

SEGUNDO: Costas en primera instancia a cargo de la señora MARÍA GLADYS ROJO PÉREZ y a favor de cada uno de las demandadas, que deberán ser liquidadas por secretaría del juzgado de origen. En esta no se causaron Al salir avante el recurso de apelación.

Lo resuelto se notifica en **EDICTO**. Se ordena regresar el proceso al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

Firmado Por:

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **20eee4e59cf87453954db679c08cd7110a947b09ccc9b29b63bffa9fecaf31c**

Documento generado en 13/03/2024 03:34:39 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>